



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

Santiago de Cali, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**Auto interlocutorio No. 327**

**MAGISTRADA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTALORA**

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-01215-00
DEMANDANTE:	DISAN COLOMBIA S.A Correo: <a href="mailto:info@arangoabogados.com.co">info@arangoabogados.com.co</a>
DEMANDADO:	DIAN Correo: <a href="mailto:notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co">notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co</a> <a href="mailto:Amartinezm7@dian.gov.co">Amartinezm7@dian.gov.co</a>
ASUNTO	<b>NEGAR MEDIDA CAUTELAR</b>

**I. OBJETO DE LA DECISION**

Se resuelve la solicitud de medida cautelar<sup>1</sup> formulada por la parte demandante, consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos demandados (Resolución liquidación nro. 1-03-241-201-640-0-000687 del 18 de febrero de 2020 y resolución nro. 3526 del 1 de julio de 2020), a fin de evitar inicie proceso de cobro de las sumas pretendidas por la entidad demanda, así como la efectividad proporcional de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales nro. 31 DL16013 Certificado 31 DL 029814 del 9 de agosto de 2017 y Certificado de modificación nro. 31 DL 029913 del 14 de septiembre de 2017 y sus futuras modificaciones, expedida por la Compañía Aseguradora de Finanzas - Confianza S.A.

**II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR**

La parte demandante sostiene que la solicitud se realizó con la finalidad de que no se inicie el cobro de lo pretendido en la demanda y no se haga efectiva la póliza de seguro de cumplimiento de la Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza.

**II. TRASLADO DE LA MEDIDA CAUTELAR**

Dentro del término de traslado, el apoderado judicial del demandado solicitó se deniegue la medida cautelar<sup>2</sup>, al indicar que el auto interlocutorio con el que se admitió el estudio de la demanda suspende el proceso de cobro que pueda adelantar la entidad contra la parte demandante al igual que la

<sup>1</sup> Ver AD en Sharepoint “003DemandaCARP1 Fls 1-62”

<sup>2</sup> Ver índice 10 de la plataforma Samaj.

exigibilidad de la póliza de seguro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario.

Añade que, de acuerdo con la norma citada, la suspensión provisional procede no sólo por violación de las disposiciones invocadas y que éste resulte del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas si llegare a probarse; sino que existe una condición adicional y es que cuando se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos, lo que no ocurre mientras el proceso esté en curso, porque la acción de cobro se encuentra suspendida.

### III. CONSIDERACIONES

#### 3.1. PROBLEMA JURÍDICO

¿La solicitud de suspensión provisional de los actos demandados cumple con los requisitos establecidos en la ley para su procedencia?

#### 3.2. TESIS:

Se negará la medida cautelar solicitada, teniendo en cuenta que la parte demandante no cumplió con su carga procesal respecto a las normas infringidas y concepto de violación que debe presentar y sustentar en el escrito de solicitud de la medida cautelar.

#### 3.3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado tiene su fundamento constitucional en el artículo 238 de la C.P. y su trámite, procedencia y demás requisitos se desarrolla en los artículos 229 y ss del CPACA.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad está dirigida a *“evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”*.<sup>3</sup>

Para la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos el CPACA indicó que debe referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese **análisis**

---

<sup>3</sup> Providencia citada *ut supra*, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

**inicial de legalidad** del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas.

El Consejo de Estado – Sección Primera, en providencia del 31 de mayo de 2019, C.P: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, anteriormente citada, recordó los postulados de la providencia del 13 de mayo de 2015<sup>4</sup> y señaló que:

*“(...) la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio (...)”.*

Tal visión ha sido compartida por la precitada Sección Primera del Consejo de Estado, en el auto del 27 de agosto de 2015<sup>5</sup>, en el cual subrayó:

*“(...) En esta providencia no se está adoptando decisión de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensión provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar)”.*

Acerca de la forma en la que el Juez debe abordar este análisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799), sostuvo:

*“(...) Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una **valoración del acto acusado** que comúnmente se ha llamado **valoración inicial**, y que implica **una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud**. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, **pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa**. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de*

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C., 13 de mayo de 2015. Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057). Actor: CARACOL Televisión S.A. y RCN Televisión S.A. Demandado: Autoridad Nacional de Televisión – ANTV. Referencia: Medio de control de nulidad simple (Auto medida cautelar de suspensión provisional)

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2015. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00194-00. Actor: Marco Fidel Ramírez Antonio. Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social.

*Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **no constituye prejuzgamiento**, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final (...)*” (Resaltado fuera del texto).

Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar, de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia del Consejo de Estado – Sección Primera, se trata de “*mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto*”<sup>6</sup>.

### 3.4. CASO CONCRETO:

En el proceso de la referencia, la parte demandante solicitó la suspensión provisional de la Resolución nro. 1-03-241-201-640-01-00687 del 18 de febrero de 2020 “*Por medio de la cual se profirió la liquidación oficial de revisión respecto de la declaración de importación con autoadhesivo nro. 06308011237179 del 8 de octubre de 2016*” y la Resolución nro. 3526 del 1 de julio de 2020 “*Mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución anterior*”.

Adujo que la medida cautelar tiene el fin de evitar que se inicie proceso de cobro de las sumas pretendidas por la DIAN, así como la efectividad proporcional de la póliza de seguro de cumplimiento de la Aseguradora de Finanzas s.a. Confianza.

Al respecto debe indicarse que el artículo 229 del CPACA es claro en establecer que la medida cautelar procede “*...a petición de parte debidamente sustentada...*”. Lo anterior, significa que la solicitud de la suspensión debe indicar de forma precisa y concreta las normas que se consideran infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de la violación.

---

<sup>6</sup> Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “*Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. // La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa [ ]. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia*”.(Negrillas fuera del texto).

Revisados los argumentos de la solicitud de medida cautelar, se tiene que el demandante refirió de manera general que los actos de registro demandados vulneran disposiciones legales, sin precisar con exactitud la normatividad violada, y que la medida iba encaminada exclusivamente a evitar que se iniciara el proceso de cobro de las sumas pretendidas por la entidad demandada y la efectividad de la póliza de seguros.

En tal sentido, es imposible, por ausencia de criterios de comparación efectuar el análisis de la procedencia de la medida, pues la parte solicitante omite cumplir su carga argumentativa que es la que delimita el marco de análisis del juez. Aunado a que la entidad demandada en su contestación a la medida fue clara en indicar, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 831 del estatuto tributario<sup>7</sup>, el auto interlocutorio con el que se admitió la presente demanda suspende el proceso de cobro que pueda adelantar la entidad, al igual que la exigibilidad de la póliza de seguro. Lo que significaría que en todo caso existe carencia actual de objeto.

En consecuencia, se;

### **R E S U E L V E**

**ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR** la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Providencia** suscrita **electrónicamente** en la **plataforma** <http://samairj.consejodeestado.gov.co> en donde se puede **corroborar su autenticidad.**



**ZORANNY CASTILLO OTALORA**  
**Magistrada**

Elab. Yurani López  
Vo.Bo. Secretario

<sup>7</sup> "Artículo 831. Decreto Extraordinario 624 de 1989. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

(...)

5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...)"